



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

AUTOS: "Incidente N° 1 - ACTOR: LERDA, SERGIO ARIEL

DEMANDADO: AFIP s/INC DE MEDIDA CAUTELAR"

En la ciudad de Córdoba, a 31 días del mes de marzo del año dos mil veinticinco, reunidos en Acuerdo de Sala "B" de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: " INC DE MEDIDA CAUTELAR LERDA SERGIO ARIEL C/ AFIP S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO" (**Expte. N°: FCB 27919 /2023/1/CA1**), venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la AFIP-DGI en contra de la medida cautelar dispuesta mediante proveído de fecha 22 de diciembre de 2023, y su prórroga del 14 de junio de 2024, por el Juzgado Federal de Villa María.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: **LILIANA NAVARRO – EDUARDO AVALOS. – ABEL G. SANCHEZ TORRES –**

La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro, dijo:

I.- Llegan los presentes autos a esta instancia en virtud de los recursos de apelación interpuestos por la AFIP-DGI en contra de la medida cautelar dispuesta mediante proveído de fecha 22 de diciembre de 2023, y su prórroga del 14 de junio de 2024, por el Juzgado Federal de Villa María, ordenándose a la Administración Federal de Ingresos Públicos que suspenda el proceso determinativo de oficio iniciado por Resolución de fecha 22 de septiembre de 2023 respecto del actor, señor Sergio Ariel Lerda.

II.- Al fundar su apelación (fs. 143/168, de las presentes actuaciones, y fs. 296/321 del Incidente N°2), sostiene la recurrente que la medida cautelar, y su respectiva prórroga, fueron dictadas sin la debida fundamentación dado que la actora se ha limitado a exponer argumentos de causas anteriores, sin aportar nuevas circunstancias que resulten



determinantes para determinar la existencia o no de la inconstitucionalidad de la normativa impugnada y, en consecuencia, la confiscatoriedad alegada. Entiende que la actora desconoce que el fraccionamiento o cómputo parcial dispuesto por la Ley 27.541 quedó agotado al liquidarse el ejercicio 2020, no resultando de aplicación el diferimiento en sextos del art. 194 de la Ley de Impuestos a las Ganancias respecto del tercer ejercicio y subsiguientes iniciados a partir del 1 de enero de 2019.

Expresa que no existe en el presente caso el “carácter preventivo”, requisito imprescindible al momento de solicitar y dictar este tipo de medidas cautelares, toda vez que la parte actora presentó su DDJJ conforme su propia interpretación de la normativa, y posteriormente AFIP impugnara la misma, pretende que la justicia convalide su accionar.

Considera que no se encuentra acreditada en autos la “verosimilitud del derecho” ni el “peligro en la demora” como requisitos fundantes de la pretensión cautelar, dado que no se vislumbra la arbitrariedad de los preceptos cuestionados. Afirma que tanto la medida cautelar como su prórroga fueron otorgadas sin dar fundamento que sustentara tal decisión, sino que sólo se basan en el informe confeccionado por un contador público contratado por el accionante. Agrega que la actora no acreditó que el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada la colocaría en una situación que tornaría imposible la sentencia que se dicte, en el caso de resultarle favorable o que no repararía su perjuicio por constituir una solución tardía.

Por último, señala que no se han cumplido los requisitos especiales dispuestos por la Ley 26.854 para el dictado de la medida cautelar. Solicita en definitiva que haga lugar a los recursos y se revoque la decisión. Hace reserva del caso federal.

Corridos los traslados de ley, fueron contestados por la accionante, solicitando el rechazo de las apelaciones, por los fundamentos que invoca y a los que me remito por elementales razones de brevedad.

III.- Previo a todo cabe mencionar que la parte actora, señor Sergio Ariel Lerda, promueve acción meramente declarativa de derecho en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tendiente a poner





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

fin a la situación de incertidumbre creada por la solicitud de rectificar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2021 y aplicar en su totalidad el ajuste por inflación impositivo, iniciada por el ente recaudador mediante Resolución administrativa de fecha 22 de septiembre de 2023. Solicita se lo autorice al cómputo del ajuste por inflación impositivo tal y como se efectuó en la declaración jurada original del impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2021, y se declare la inconstitucionalidad el criterio técnico del AFIP que exige se aplique el cómputo del ajuste por inflación en toda su amplitud para el ejercicio 2021.

En su demanda, solicita el dictado de una medida cautelar con el objeto de que se ordene a la AFIP que suspenda el proceso determinativo de oficio iniciado por el organismo. La medida fue concedida por el Juez de grado en los términos que más arriba se exponen, por considerar que se dan los requisitos legales para su procedencia. Posteriormente, con fecha 14 de junio de 2024, el a quo hizo lugar a la prórroga de la medida cautelar solicitada por la parte actora. Ambas resoluciones fueron apeladas, y el 17 de octubre de 2024 se acumuló la prórroga a los presentes autos, lo que ahora son objeto de estudio.

IV.- Ingresando al tratamiento de la cuestión traída a estudio, corresponde señalar que la Ley N° 26.854 sancionada por el Honorable Congreso de la Nación el día 30 de abril del 2013 y con vigencia a partir del 8 de mayo de ese mismo año, en su artículo 18, establece categóricamente que el C.P.C.C.N. será de aplicación “al trámite de las medidas cautelares contra el Estado Nacional o sus entes descentralizados” en cuanto no sean incompatibles con este nuevo régimen legal. Por lo tanto, a la hora de establecer los parámetros de la procedencia de una medida cautelar contra el Estado Nacional o un ente descentralizado, habrá que acudir a la norma especial; y en lo que fuera pertinente, a las normas del Código Procesal.

Dicho esto, dentro del catálogo de medidas cautelares que contiene el nuevo régimen legal, el análisis a efectuarse deberá encaminarse en esta hipótesis en función de las previsiones del artículo 13 de la mentada ley. Dicha norma establece en lo pertinente: “1. La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a



pedido de parte cuando concurren simultáneamente los siguientes requisitos:
a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles.”

Como puede advertirse, la norma antes referida impone el análisis de una serie de conceptos jurídicos indeterminados que habrán de apreciarse en cada caso concreto. En este cometido, se deberán evaluar tales preceptos en forma acorde y en consonancia con la garantía de tutela judicial efectiva, entendida como un derecho humano fundamental consagrado como un principio constitucional, contemplado en diversos tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (art. 75 inciso 22 de la C.N.). Entre ellos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 8 punto 1, y 25) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.3 y 14.1), entre muchos otros. Dicha garantía anudada a la del debido proceso (art. 18 C.N.) aconsejan al operador jurídico extremar las posibilidades de interpretación en relación a la tutela cautelar, en un sentido que no desnaturalice el acceso a la jurisdicción; lo cual debe ser ponderado puntualmente en cada caso y según las circunstancias presentes en cada causa.

V.- A la luz de lo expuesto, adviértase que la actora fundamenta el pedido de medida cautelar en el Informe contable que acompaña, suscripto por Contador Público Independiente y certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Córdoba, donde se expresa que en este caso concreto se aplicaría una alícuota del Impuesto a las Ganancias, por el ejercicio fiscal 2021, que asciende al 36,758% (en lugar de la alícuota legalmente prevista del 35%).

Con ese informe pretende demostrar el incremento en la utilidad impositiva resultante de aplicar el ajuste por inflación impositivo en su totalidad.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

De este modo, luego de analizada la plataforma fáctica y jurídica de los presentes autos, si bien no hay todavía pericia contable judicial que acredite o respalde los dichos de la parte actora, considero que a esta altura de las actuaciones es procedente la tutela concedida en la instancia de grado, toda vez que resulta verosímil el derecho de dicha firma –reitero- para el estadio procesal en el que se encuentra la causa.

Lo dicho –reitero- lo es sin perder de vista que se está ante el cuestionamiento de una medida cautelar la cual, como característica principal, no causa estado y puede ser revisada y/o modificada en cualquier estado del proceso. En tal sentido, cabe tener presente que “las medidas cautelares tienen un contenido meramente preventivo: no juzgan ni prejuzgan sobre el derecho del peticionante” (Eduardo J. Couture, “Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Ed. Depalma, Bs. As., 1997, pág. 326).-

Concluyo así que existe “verosimilitud del derecho” como requisito fundante de la pretensión cautelar peticionada por la empresa actora.

VI.- El peligro en la demora como exigencia se mantiene con la Ley 26.854 (artículo 15 inciso “a”), agregando el nuevo precepto legal la necesidad de acreditar la irreparabilidad ulterior de la lesión que la accionante denuncia. El requisito en cuestión, se vincula ya sea con la posibilidad que al dictar sentencia definitiva la misma sea ineficaz o de imposible cumplimiento o bien que se le provoque al accionante un daño innecesario. La exigencia de la concurrencia del peligro en la demora a los fines del dictado de la medida cautelar impone una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que llegan a producir los hechos que se pretenden evitar puedan restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego originado por la sentencia dictada como acto final y extintivo del proceso (C.S.J.N. 19/2/2.008 “Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio c/ Provincia de Tucumán”).

En el supuesto de autos, resulta viable lo sustentado por la actora, ya que ante un eventual reclamo de cobro por parte del Fisco de la suma discutida, podría acarrearle un perjuicio económico, sin que lo expuesto implique expedirse sobre la legitimidad o ilegitimidad de la decisión administrativa y sobre el planteo de inconstitucionalidad articulado, materia



sobre la cual corresponderá resolver al momento de dictar la sentencia definitiva.

Asimismo, lo dispuesto por el artículo 3 inciso 4° de La Ley 26.854 en el sentido que las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal, no se verifica en la especie toda vez que la pretensión de fondo subsiste, en función del interés jurídico de analizar en oportunidad de la sentencia definitiva la procedencia o no del mecanismo de ajuste por inflación como así también la inconstitucionalidad planteada en relación a la normativa antes citada.

VII.- Con respecto a la no afectación del interés público y dada la naturaleza de la medida cautelar aquí dispuesta, la misma no puede configurar lesión al interés público ya que se encuentra circunscripta a la situación de un contribuyente respecto de su situación en relación al pago del impuesto a las ganancias en función de encontrarse cuestionada la legitimidad del procedimiento y/o mecanismo aplicable en lo que hace al ajuste por inflación. En consecuencia, si bien podría argumentarse que ello conspira con la recaudación de la renta pública, y que por tal motivo las medidas cautelares en contra del Fisco son juzgadas con estrictez, esta circunstancia no quiere decir que por aplicación de la normativa bajo análisis se encuentre vedada la posibilidad de disponer medidas cautelares en contra de la Administración Fiscal.

Finalmente, la medida que se dispone no tiene efectos jurídicos irreversibles, ya que como lo señalé anteriormente tiene por objeto la postergación –sólo hasta que se resuelva la presente acción- de la posible aplicación del mecanismo antes mencionado a fin de realizar los cálculos correspondientes al tributo en cuestión.

VIII.- Por los fundamentos aquí expuestos, corresponde confirmar los proveídos impugnados en cuanto hacen lugar a la medida cautelar y a su prórroga, solicitadas por el actor, señor Sergio Ariel Lerda.

Las costas de la Alzada se imponen en su totalidad a la recurrente perdedora –AFIP- en virtud del principio objetivo de la derrota contemplado en el art. 68 1era. parte del CPCN, difiriéndose la regulación de honorarios profesionales que pudiera corresponder para su oportunidad. **ASI VOTO.-**





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por el señor Jueza preopinante, doctora LILIANA NAVARRO, vota en idéntico sentido.

El señor Juez de Cámara, doctor EDUARDO AVALOS, dijo:

I.- Luego de un detenido análisis de la causa puesta a estudio, disiento con la solución propuesta por la señora Jueza doctora Liliana Navarro en cuanto propicia confirmar el proveído de fecha 22 de diciembre de 2023 dictado por el Juzgado Federal de Villa María, en todo lo que decide y que fue materia de agravios, doy razones.-

Haciendo propia la relación de causa desarrollada por la Magistrada preopinante, he de referir que el presente recurso fue interpuesto por la demandada AFIP-DGI, agraviándose de lo resuelto por el señor Juez de grado, en cuanto dispone hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por el plazo de seis (6) meses ordenándose a la Administración Federal de Ingresos Públicos que suspenda el proceso determinativo de oficio iniciado por Resolución de fecha 22 de septiembre de 2023 en relación al actor, señor Sergio Ariel Lerda.

Es oportuno mencionar que la medida cautelar dictada, cuyo recurso de apelación hoy nos ocupa, fue prorrogada con fecha 13 de junio de 2024, en idénticos términos por el plazo de seis (6) meses, en virtud de considerar el Magistrado de grado que se mantenían reunidos los supuestos fácticos y los elementos que dieron lugar al otorgamiento de la primigenia medida cautelar, entendiendo este Juzgador que la misma se encuentra vigente y por ello corresponde su tratamiento.

A mérito de la reseña que antecede, la cuestión a resolver se circunscribe a analizar la procedencia o no de la medida cautelar concedida por el señor Juez de Primera Instancia con fecha 22/12/23.

II.- Previo a todo, considero necesario destacar que mediante la reforma tributaria operada en el año 2017 mediante Ley N° 27.430 (B.O. 29/12/2017) a través del art. 65, incorporó dos párrafos al final del art. 106 LIG (t.o. 2019, anterior art. 95 t.o.2017) donde se puso en vigencia práctica el



llamado “ajuste por inflación impositivo” cuando la inflación acumulada de los 36 meses anteriores al cierre del ejercicio fiscal del contribuyente superare el 100%. El índice a aplicar era el correspondiente a Precios Internos al por Mayor (IPIM), sólo para los ejercicios que se iniciaren a partir del 1/1/2018 con una transición equivalente al 33.33% y 66.66% de inflación para el primer y segundo año posterior a la entrada en vigencia de la norma, respectivamente. Amén de ello, mediante la Ley N° 27.468 (B.O. 4/12/2018) se modificó el art. 106 de la LIG mencionado precedentemente, estableciéndose que respecto del primer, segundo y tercer ejercicio iniciados a partir del 1/1/2018, el ajuste por inflación sería aplicable sólo en caso que la variación del índice de precios al consumidor nivel general (IPC), calculado desde el inicio hasta el cierre del ejercicio, superare un 55%, 30% o 15% para el primer, segundo y tercer año de aplicación respectivamente. A su vez, mediante el art. 4 incorporó a la LIG el art. 194 estableciendo que el resultado por aplicación del ajuste, ya fuere positivo o negativo, se computaría un tercio (1/3) en el año en el que se generare el ajuste impositivo y los otros dos tercios (2/3) restantes, en partes iguales, en los siguientes dos ejercicios.

Finalmente, mediante la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva (B.O. 23/12/2019) a través de su artículo 27, modificó este último art. de la LIG difiriendo aún más la imputación del resultado por exposición a la inflación. Por consiguiente, quedó establecido que el resultado, positivo o negativo según el caso, debería imputarse un sexto (1/6) en ese período fiscal y los cinco sextos (5/6) restantes, en partes iguales, en los cinco (5) períodos fiscales inmediatos siguientes; aclarando la norma que para el ajuste que hubiera correspondido por el primer ejercicio iniciado a partir del 01/01/2018 se mantendría el prorrateo de 1/3 por cada período fiscal, pero para ejercicios iniciados a partir del 01/01/2019 se debería prorratear en 6 ejercicios fiscales, imputando un sexto a cada uno (2019 a 2024), lo mismo respecto del segundo ejercicio iniciado con posterioridad al 1° de enero de 2019.

Este nuevo marco normativo mediante el cual el legislador habilitó el cómputo del ajuste por inflación supeditado a la concurrencia de determinados requisitos, implica realizar otro análisis jurídico que difiere de





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

aquellos en que los periodos involucrados fueren anteriores al 1/1/2018, ya que el mismo ha recobrado vigencia y no se encuentra vedado como ocurría en otros periodos analizados anteriormente.

Desde otro costado, el art. 13 de la ley N° 26.854 (B.O. 30/04/2013) que regula el régimen de medias cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional, establece una serie de requisitos -que forman un conjunto de conceptos jurídicos indeterminados- que, a la hora de evaluar la suspensión de un acto estatal, ya sea un acto administrativo, un reglamento o una ley, habrán de evaluarse en cada caso concreto. Ello debe concordarse con lo previsto en el art. 3, inc. 4° de la mentada ley en el sentido de que las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal.

III.- Del escrito de demanda, se infiere que la actora pretende se autorice el computo del ajuste por inflación impositivo tal como lo efectuó en la declaración jurada presentada correspondiente al ejercicio fiscal 2021 -aplicando el ajuste por inflación a un tercio del impuesto a las Ganancias- y que se declare la inconstitucionalidad del art. 5 de la Ley 26.854 y del ajuste por inflación para el ejercicio 2021 por considerar que absorbe parte sustancial de la renta de su patrimonio.

Sostiene que por Resolución de fecha 22/9/2023 la demandada dictó el acto administrativo que en su art. 1° impugna la declaración jurada del impuesto a las Ganancias periodo 2021 y en el art. 2° da inicio al procedimiento de determinación de oficio del mentado impuesto y periodo citado.

Expone que de computar el ajuste por inflación en su totalidad en el ejercicio 2021 del impuesto a las Ganancias y conforme lo previsto en el art. 25 de la Ley del Impuesto a las Ganancias t.o. 2019 y modificatorias y asimismo en el art. 85 de la Ley 27.430 le provocaría una exacción patrimonial de tal magnitud que violentaría los principios que gobiernan la tributación y que están consagrados en la Carta Magna.

Por ello, peticiona mediante la medida cautelar que la AFIP suspenda el proceso determinativo de oficio iniciado por Resolución de fecha 22 de septiembre de 2022, y sostiene que de no ser así el organismo recaudador en el marco de ese proceso, mediante la aplicación de la Resolución que regula



el SISA, lo incluirá en Situación 3 de SISA, lo que torna inviable comercializar granos en condiciones normales del mercado granario y que lo que lo llevaría a un estado de cesación de pagos que conduciría inexorablemente a la quiebra.

Expone el actor que las sucesivas las Leyes 27.430, 27.468 y 27.541 fueron modificando el mecanismo del ajuste por inflación aplicable al Impuesto a las Ganancias, del 100% a tercios y luego a sextos, pero debido a que el periodo liquidado y observado por el Organismo recaudador corresponde al periodo 2021, en el cual, -según su criterio las leyes anteriores perdieron vigencia- por no haber sido aprobada por el Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2022 que pretendió a último momento reimplantar el diferimiento en tercios, y ante la falta de certeza sobre la aplicación de los diferimientos, presentó la declaración jurada aplicando el ajuste por inflación sobre el impuesto a las ganancias en un tercio (1/3), exponiendo sus razones y solicitando como medida cautelar que la AFIP-DGI no inicie acciones y posteriormente se haga lugar a la demanda en los términos planteados.

IV.- De lo expuesto surge evidente que la pretensión de fondo se identifica con la medida cautelar peticionada, toda vez que de otorgarse la misma se estaría dando por sentado la aplicación de la normativa en análisis de acuerdo al criterio utilizado por el accionante, cuyo tratamiento necesariamente constituye el objeto de la litis, como asimismo importaría obtener un fallo anticipado de la causa, soslayándose todas las etapas procesales del pleito, en violación al debido proceso legal como garantía innominada de la Constitución Nacional, diluyéndose la acción impetrada en el otorgamiento de aquella.

Desde esta perspectiva, no resultan viables aquellas medidas cautelares que pretenden imponer un inoportuno discernimiento sobre cuestiones que, por su complejidad técnica y jurídica, exceden el limitado ámbito de conocimiento preliminar propio de una cautelar, como sucede en el caso de autos. Repárese que el proceso precautorio no puede representar adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, atendiendo a que las medidas cautelares tienen un contenido meramente preventivo: no juzgan ni prejuzgan





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

sobre el derecho del peticionante” (Couture, Eduardo J. “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” Ed. Depalma, Bs.As. 1.997, pág. 326).

V.- Mas allá de lo expuesto en el punto precedente, entiendo que tampoco se encuentran cumplidos los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora.

En cuanto a la verosimilitud del derecho invocado, si bien éste no se trata de un juicio de certeza sobre la misma sino un juicio hipotético o conjetural, puede advertirse que el mismo no se encuentra a mi criterio acreditado, toda vez que la empresa actora pretende fundarlo en el Informe contable acompañado por su parte, sumado a que estamos en presencia de un cambio normativo de relevancia y por demás complejo. Por lo tanto, considero que no basta un mero cotejo de resultados impositivos y/o contables con o sin ajuste por inflación así como tampoco entre resultados impositivos y/o contables con o sin diferimiento; sino que en base a sus características propias, deberá estarse al resultado de la pericia contable en donde un técnico experto informe sobre la materia en el periodo fiscal objeto de discusión dentro del marco técnico y procesal que corresponde.

Como ya lo he afirmado en anteriores pronunciamientos y que hoy adquiere relevancia también, nuestro más Alto Tribunal ha descalificado como acto jurisdiccional aquellas sentencias cautelares cuyo único basamento se encuentra en las afirmaciones del peticionante de la medida precautoria. Así lo ha dispuesto en la causa “Empresa Constructora Juan M. De Vido e Hijos SCA c/A.F.I.P. s/Incidente de apelación de medida cautelar” del 25 de octubre de 2005, oportunidad en la cual dejó sin efecto el pronunciamiento que había otorgado una medida precautoria con el sólo respaldo de las afirmaciones de la actora, lo que resulta plenamente aplicable en el caso bajo análisis.

En cuanto al peligro en la demora, considero que el mismo tampoco ha sido acreditado por la parte actora, así como la irreparabilidad ulterior de la lesión. En este sentido, no ha demostrado el real perjuicio actual que podría ocasionarle; lo que aparece a todas luces como insuficiente en este estadio del proceso.



VI.- Por todo lo expuesto, tomando como principio rector que el régimen de las medidas cautelares en materia de reclamos y cobros fiscales debe ser analizado con particular estrictez, es que propicio revocar el proveído de fecha 22 de diciembre de 2023, dictados por el Juez Federal de Villa María en todo lo que decide y ha sido materia de agravios. Las costas de la Alzada se imponen en el orden causado (art. 68, 2da parte del CPCCN) atento la naturaleza de la cuestión debatida; difiriéndose la regulación de honorarios que pudiera corresponder para su oportunidad.

El presente pronunciamiento en modo alguno significa adelanto de opinión sobre el fondo del asunto, siendo consecuencia de un análisis superficial propio del estadio cautelar.

Por todo ello, y atento a los fundamentos expuestos, considero que corresponde revocar la medida cautelar de fecha 22 de diciembre de 2023, y su prórroga de fecha 13/6/2024 como consecuencia inmediata de esta decisión dictada por el entonces Juez Federal de Villa María e imponer las costas en el orden causado (art. 68, 2da parte del CPCCN), difiriendo los honorarios que pudieran corresponder para su oportunidad. **ASI VOTO.-**

Por ello;

SE RESUELVE:

POR MAYORIA:

1) Confirmar la medida cautelar de fecha 22 de diciembre de 2023 y su prórroga de fecha 14 de junio de 2024, dictada por el Juzgado Federal de Villa María, en todo lo que decide y ha sido materia de agravios.

2) Imponer las costas de la Alzada a la recurrente perdedora –AFIP- en virtud del principio objetivo de la derrota contemplado en el art. 68 1era. parte del CPCN, difiriéndose la regulación de honorarios profesionales que pudiera corresponder para su oportunidad.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA B

3) Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y
bajen. -

ABEL G. SANCHEZ TORRES

LILIANA NAVARRO

EDUARDO AVALOS

MIGUEL H. VILLANUEVA
SECRETARIO DE CAMARA

Fecha de firma: 31/03/2025

Alta en sistema: 01/04/2025

Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES, PRESIDENTE

Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CÁMARA

Firmado por: LILIANA NAVARRO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EDUARDO AVALOS, JUEZ DE CAMARA



#38951382#445888545#20250331100841003